

PERU

PE-T1458

COVID-19 y las migraciones de la ciudad al campo en el Perú: Identificación de amenazas y oportunidades para el uso sostenible del capital natural.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. Contexto y justificación

En el Perú, más de 220,000 personas se han registrado en los padrones de gobiernos regionales con el objetivo de dejar las ciudades en las que viven y regresar con sus familias a sus zonas de origen, principalmente zonas rurales, debido al impacto causado por el confinamiento establecido por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19¹ y la pérdida de sus formas de sustento². El confinamiento ha obligado a un gran número de trabajadores con bajos recursos a dejar sus empleos, la mayoría de ellos informales. Se estima que más del 70% de los trabajadores en el país se encuentra en la informalidad, sin derechos laborales y, la mayoría, con ingresos precarios. La pandemia está fuertemente afectando el Perú, donde hay más de 455.409 casos de infectados y 20.424 fallecidos identificados al 7 de agosto de 2020.

Con el fin de controlar la propagación de la enfermedad, el gobierno llevó a cabo transferencias humanitarias interregionales durante el periodo de cuarentena obligatoria (que finalizó el 30 de junio de 2020), para evitar que estas personas viajen por su cuenta y puedan trasladar el virus a sus lugares de origen. Las personas registradas debían pasar exámenes ofrecidos por el gobierno para descartar la presencia de la enfermedad y completar dos semanas de cuarentena en sus lugares de llegada. Este éxodo se dio en gran medida desde la ciudad de Lima, pero también ocurrió en muchas ciudades del interior del país; por ejemplo, en Cajamarca se registraron 31.025 solicitudes de retorno³ y en Cusco 20.000⁴. Esta situación revierte la tendencia por la que durante décadas las familias rurales han viajado desde el campo a las ciudades en busca de trabajo. En Lima, el censo de 2017 registró a 3.404.581 personas nacidas fuera de la ciudad lo que supone un 35% del total de la población limeña⁵.

A pesar de la ayuda económica facilitada por el Gobierno con bonos equivalentes a US\$220 dirigido a 8,5 millones de hogares, para muchas de ellos esta cantidad es insuficiente. Además, se suma la alta informalidad laboral y la precariedad del sistema de salud en el país (la inversión en salud es menor al cinco por ciento del PBI al año), lo que hace que la capacidad del país para responder y tratar la pandemia sea baja.

El desplazamiento de miles de personas en el país durante la pandemia y especialmente hacia las zonas rurales resultará para unos en el reencuentro de muchas familias y la seguridad de vivienda y alimento a corto plazo. Sin embargo, para otros el retorno significa regresar a zonas de conflicto donde existe tala y minería ilegal y zonas controladas por el narcotráfico, condiciones que provocaron

¹ DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/>.

² <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/Cr%C3%B3nica-del-Gran-Encierro-1.pdf>

³ <https://idl.org.pe/los-retornantes-por-que-existe-un-exodo-de-migrantes-internos-hacia-las-regiones>

⁴ <https://www.nodal.am/2020/04/exodo-masivo-en-peru>

⁵ <https://www.inei.gob.pe/>

su migración a la ciudad con anterioridad. Esta situación crea una incertidumbre sobre el futuro económico y la fuente de sustento. Existe el riesgo de que la migración masiva de personas a determinados lugares rurales imponga prácticas no sostenibles de gestión de la tierra, lo que aumenta la presión sobre las unidades de producción familiar con actividades agrícolas más intensas con la consiguiente reducción de la calidad del suelo o la degradación de las tierras, además de un aumento de la deforestación y la degradación forestal en zonas de montaña boscosas y en la región amazónica. Los migrantes recién llegados podrían crear una fuente potencial de conflictos sobre la tenencia de la tierra debido a prácticas no autorizadas de asentamiento y extracción. La falta de trabajo y la desesperación por acceder a recursos monetarios rápidos podría llevarlos a participar en actividades que generan ingresos rápidos como cultivos ilegales, extracción de madera, tala ilegal, minería ilegal, caza furtiva y tráfico de animales⁶. Por otra parte, los retornantes —en particular jóvenes, niños y mujeres— están expuestos a la trata de personas para su explotación laboral y sexual, especialmente en las zonas de mayor incidencia de este delito.

Asimismo, con las instituciones del gobierno ocupadas en el necesario control de la pandemia, la capacidad de monitoreo de la deforestación se podría debilitar dando oportunidad para que muchas personas deforesten⁷. Es difícil cuantificar los posibles impactos de prácticas no sostenibles, incluidas las emisiones de CO₂, los cambios en las reservas de carbono en los bosques y los suelos y las implicaciones para los compromisos climáticos internacionales que Perú ha acordado alcanzar. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene varias operaciones en preparación o ejecución en el Perú, en particular las operaciones que apoyan la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) (PE-T1385, PE-L1232, PE-L1026, PT-T1427 y PE-L1258) y la PE-L1249 (que no está en el ámbito de la Estrategia REDD+) que pueden ser altamente afectadas. Por esta razón, es importante comprender el impacto social y ambiental potencial de la migración interna en el Perú como resultado de la pandemia del COVID-19 y proponer acciones de mitigación a mediano y largo plazo.

Además, el BID está apoyando al Perú y a otros países de América Latina y el Caribe para responder a la crisis causada por la pandemia y a encontrar caminos para la recuperación económica, centrándose en políticas y acciones que beneficien a los más vulnerables y protejan el medio ambiente. Comprender el movimiento de la migración interna en el contexto del COVID-19 y conocer las condiciones económicas y sociales de los migrantes ayudará al gobierno peruano a enfocar sus estrategias como parte del proceso de recuperación económica del país, creando oportunidades de empleo e inclusión para los migrantes a través del uso sostenible del capital natural, reduciendo los impactos sociales y ambientales originados por la migración masiva. Actividades como la restauración de bosques y paisajes degradados, conservación de la biodiversidad, turismo sostenible y desarrollo de bio-emprendimientos pueden emplear a numerosas personas en las áreas de migración, reduciendo o evitando futuras migraciones a las principales ciudades.

⁶ Conservation International. Poaching, deforestation reportedly on the rise since COVID-19 lockdowns. <https://www.conservation.org/blog/poaching-deforestation-reportedly-on-the-rise-since-covid-19-lockdowns>

⁷ CNN. <https://www.cnn.com/2020/05/14/americas/coronavirus-amazon-brazil-destruction-intl/index.html>

2. Objetivo

El objetivo de la consultoría es generar un estudio para analizar las condiciones económicas y sociales de la población migrante que se trasladó de la ciudad al campo como consecuencia del COVID-19, identificar los posibles conflictos e impactos en el uso de los recursos naturales debido a la migración interna, y proponer estrategias sostenibles para la creación de empleos verdes que minimicen los conflictos e impactos identificados. El estudio informará al Gobierno del Perú y a las operaciones del BID en preparación o ejecución en el país, en especial las relacionadas con la Estrategia REDD+.

3. Alcance

La consultoría revisará diversas fuentes de información para identificar las zonas de migración interna en todo el país. Para el análisis socioeconómico de los migrantes se seleccionarán los hotspots de migración que presenten mayor número de desplazamientos efectuados, incluyendo como mínimo las tres regiones amazónicas que son parte del Programa de Inversión Forestal (FIP).

4. Actividades clave

Para la realización del estudio se llevarán a cabo las siguientes actividades, organizadas en tres componentes:

Componente 1. Identificación de hotspots: Se identificará hotspots de migración hacia las zonas rurales a través del mapeo y modelado del movimiento de personas registradas en los diferentes padrones tanto del gobierno central como regional, listados y estadísticas de movilizados formales y otras estadísticas o listados manejados por el gobierno.

Cada individuo registrado en las diferentes fuentes de información se identificará en lo posible con la siguiente información: nombre, edad, sexo, número y nombres de miembros de la familia, etnia, presencia de discapacidad, localidad de origen, localidad de destino, dirección en el destino, si es una casa familiar en destino, número de teléfono y / o dirección de correo electrónico, actividad laboral previa y condición económica. La información se recopilará en una base de datos que permita la generación de estadísticas. Se utilizarán un sistema de información geográfica (SIG) para caracterizar e identificar patrones de movimientos y ubicación de los hotspots de migración. Con el fin de cubrir una representatividad de las poblaciones rurales se seleccionarán los hotspots de migración con mayor número de desplazamientos. Se evaluará hotspots en las regiones de la selva, la sierra y la costa. Como mínimo se incluirán los hotspots en las tres regiones amazónicas de acción del proyecto FIP.

Componente 2. Condiciones socioeconómicas de los migrantes en los hotspots: Se reunirá información clave adicional de los migrantes en los hotspots seleccionados en el componente 1. Esta información mostrará la situación actual de los migrantes, sus potenciales necesidades y barreras de acceso a actividades económicas, así como los conflictos a los que los migrantes y las comunidades se enfrentan en el corto y largo plazo. Se realizarán entrevistas, encuestas y/o grupos focales que ayuden a crear perfiles de cada uno de los migrantes y que permitan comparar su situación social, económica, ambiental y de salud actual con la que tenían antes de la migración, así como sus planes futuros. Asimismo, se tratará de detectar potenciales situaciones familiares o personales que puedan conducir al

tráfico de personas o la explotación sexual. Para recopilar la información se realizará una encuesta empleando las plataformas más adecuadas teniendo en cuenta las recomendaciones de salud de las autoridades del país para el manejo del COVID-19: llamadas telefónicas, mensaje de texto, aplicaciones de mensajería en redes sociales, plataformas en línea, correo, radio, televisión, panfletos, entrevistas de puerta a puerta o mini talleres. La consulta utilizará tecnologías y metodologías socioculturales adecuadas que permitan la participación cuantitativa y cualitativa de mujeres y hombres. En lo posible se identificará la ubicación geográfica exacta donde la persona migrante se trasladó, ya sea por la descripción de la parcela, dirección o por coordenadas geográficas obtenidas por Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Se consultará sobre información socioeconómica en su situación actual, incluido el número de integrantes en la familia, acceso a servicios básicos, vivienda y trabajo.

Toda esta información se registrará en una base de datos y se utilizará el SIG para superponer las ubicaciones de la población objetivo con capas de información espacial de tenencia de la tierra y datos socioambientales para: (i) identificar problemas de tenencia u ocupación ilegal; y (ii) identificar conflictos actuales socioambientales.

Se prestará especial atención en la identificación de cualquier conflicto que estas migraciones puedan haber creado con los pueblos indígenas que viven en las zonas rurales y recoger las percepciones de las autoridades y comunidades campesinas locales sobre los cambios en la dinámica social, económica y productiva como consecuencia de la recepción de los migrantes. Durante esta fase, los migrantes entrevistados identificarán el futuro esperado y en conjunto con el equipo de consultoría identificarán diferentes oportunidades y necesidades.

Componente 3. Recomendaciones: Se analizará información de los Componentes 1 y 2 para (i) crear una descripción detallada de la situación de los migrantes; (ii) informar sobre los diferentes conflictos e impactos socioambientales causados por las migraciones en las zonas rurales; (iii) facilitar recomendaciones sobre potenciales actividades económicas en diferentes sectores que reduzcan los impactos ambientales y sociales, mejoren infraestructuras productivas y generen oportunidades de empleo en las poblaciones rurales en los hotspots, poniendo especial énfasis en la creación de empleo entre mujeres; (iv) identificar las barreras específicas a las que se enfrentan hombres y mujeres para acceder a oportunidades laborales así como medidas para superar esas barreras; y (v) identificar posibles problemas sociales que favorezcan la involucración de migrantes en actividades ilegales como las redes de trata de personas, la minería ilegal, los cultivos ilegales y los grupos armados, y situaciones de violencia de género.

Se busca fortalecer el rol de los migrantes como agentes estratégicos clave para un cambio sostenible y reducir riesgos para las operaciones que el BID está desarrollando en el Perú, en especial las que apoyan la Estrategia REDD+. Se prestará especial atención en la identificación de oportunidades de empleo que mejoren la infraestructura natural y una recuperación verde del país, al tiempo que mejoren la capacidad de adaptación de la población local y reduzcan la vulnerabilidad de los migrantes. Se pondrá especial atención en la generación de empleo entre mujeres. Se explorará diferentes oportunidades de empleo con análisis de costo beneficio para su implementación.

5. Resultados esperados y entregables

- *Entregable 0*. Plan de Trabajo detallado, que describa el cronograma de actividades y la metodología propuesta para el estudio.
- Componente 1, identificación de hotspots:
 - *Entregable 1a*: base de datos con la información de los migrantes de COVID-19 registrada en las diferentes fuentes de información, según el detalle requerido en la sección 4, componente 1.
 - *Entregable 1b*: informe con la identificación de los hotspots y un SIG que incluya el modelamiento de hotspots.
- Componente 2, situaciones actuales y futuras en los hotspots
 - *Entregable 2a*: base de datos que incluya los registros sociales, económicos y ambientales de los migrantes en los hotspots seleccionados, como resultado de la encuesta.
 - *Entregable 2b*: perfil de los migrantes por hotspot que incluya: a) problemas actuales y potenciales identificados en la tenencia de la tierra u ocupación ilegal, b) conflictos sociales actuales, c) potenciales impactos ambientales, d) vulnerabilidades identificadas que pueda favorecer la participación en actividades ilegales, tales como redes de trata de personas, minería ilegal, cultivos ilegales o la integración en grupos armados, y e) las expectativas de los entrevistados junto con las oportunidades y necesidades identificadas.
 - *Entregable 2c*: SIG con información espacial sobre conflictos de tenencia de tierras e impactos socioambientales.
- Componente 3, Recomendaciones:
 - *Entregable 3*: informe final que incluya: i) recomendaciones al gobierno sobre estrategias sostenibles para la creación de empleos verdes entre los migrantes que reduzcan los impactos ambientales y sociales, con especial atención a empleo para las mujeres y a las barreras a las que se enfrentan; y análisis de costo beneficio para la implementación de las recomendaciones; y ii) resumen ejecutivo que describa las principales actividades, metodología, resultados y conclusiones del estudio.

Los entregables deben estar en formato electrónico en MS Word, Excel u otra aplicación aceptable, en español. Copias funcionales de los archivos digitales y SIG (.shp, .tiff, .grd, .gdb, .mxd, etc.), modelos, bases de datos y cualquier otro archivo creado durante la consultoría debe ser entregado al BID.

6. Hitos

El calendario de los hitos principales a lograr será el siguiente:

Hito	Término
Entregable 0	Dentro de los 10 días calendario posteriores a la firma del contrato
Entregable 1a y 1b	Dentro de los 30 días calendario posteriores a la firma del contrato
Entregable 2a, 2b, 2c	Dentro de los 60 días calendario posteriores a la firma del contrato
Entregable 3	Dentro de los 90 días calendario posteriores a la firma del contrato

7. Criterios de aceptación

Los entregables recibirán comentarios y recomendaciones de los especialistas del BID, los cuales deben ser incorporados por la firma consultora en una versión revisada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de los comentarios y recomendaciones, para su aprobación final.

8. Supervisión e informes

La firma consultora reportará directamente y enviará los entregables a Jaime Fernández-Baca (CSD/CCS), quien aprobará los pagos respectivos una vez que el BID acepte los productos especificados en los términos de referencia. Las comunicaciones se realizarán con copia a Martha Denisse Piérola (SCL/MIG) y otros especialistas del BID según sea definido.

9. Calendario de pagos

CALENDARIO DE PAGOS	
Entregable	Porcentaje
Entregable 0	10%
Entregable 1a, 1b	30%
Entregable 2a,2b y 2c	40%
Entregable 3	20%
Total	100%

10. Características de la consultoría.

Plazo: 3 meses.

Lugar de trabajo: Perú

Calificaciones: El equipo de consultores debe tener experiencia en temas sociales y de género, análisis y desarrollo de estadísticas y SIG. Es esencial que parte o todo el equipo esté constituido por profesionales locales. El conocimiento sobre el manejo de los recursos naturales y sobre cambio climático y sus efectos en la población vulnerable es altamente deseable.

El equipo de consultores debe estar compuesto por:

- Líder del proyecto: al menos 10 años de experiencia profesional demostrada en temas relacionados con desarrollo socioeconómico sostenible en ámbitos rurales, gestión de equipos multidisciplinarios y diseño de procesos de recolección de información con metodologías socioculturales adecuadas al entorno social. El conocimiento de la mitigación y adaptación al cambio climático, y/o el manejo de recursos naturales se considera una ventaja.
- Especialista en censos: profesional universitario con formación en sociología, geografía, ingeniería o títulos similares con al menos 5 años de experiencia comprobada en el desarrollo y ejecución de cuestionarios censales. Capacidad probada para trabajar en el campo y en delicadas condiciones sociales.
- Especialista social y de género: al menos 5 años de experiencia profesional demostrada en la realización de actividades de extensión comunitaria en comunidades vulnerables con especial atención a las cuestiones de género. La experiencia comprobada en el desarrollo de programas de inclusión social es imprescindible. Título profesional en ciencias sociales, antropología, ingeniería, geografía o disciplinas relacionadas.

- Especialista en SIG: al menos 5 años de experiencia profesional demostrada en el desarrollo de mapas temáticos. Profesional universitario en ingeniería, geografía, sociología, ciencias naturales o títulos similares con experiencia comprobada en la creación de mapas temáticos, censos de población y desarrollo y análisis de estadísticas. Debe tener experiencia probada en el uso de ArcGIS (o similar) y programas de edición digital.